



PATRICIO MEZA GARCÍA
Administrador en
Seguridad Pública.

La ciudad que no ve: Por qué debemos volver a preocuparnos de nuestros espacios públicos

prevención del delito. La evidencia en criminología urbana y políticas públicas apunta desde hace años a la prevención situacional como herramienta clave para evitar hechos delictivos, mediante medidas tan básicas como mantener el alumbrado público en condiciones, evitar zonas oscuras, conservar entornos limpios y habitables, y garantizar una circulación activa de ciudadanos.

En redes sociales, el clamor es constante y transversal. “Nadie hace nada”, se repite. Videos grabados en pleno centro muestran personas en situación de calle que evidencian problemáticas psiquiátricas graves, hombres y mujeres que duermen al lado de juegos infantiles, niños que sortean fecas humanas en sus trayectos escolares. ¿Acaso esto no merece una intervención urgente y organizada? Porque si bien es cierto que no se puede culpar a las personas en situación de calle por su condición —muchas veces originada por quiebres familiares, desempleo, adicciones o enfermedades no tratadas—, también es verdad que la indiferencia institucional solo empeora la exclusión.

El primer paso no es reprimir ni

expulsar. El primer paso es mirar. Empadronar, levantar información, conocer con nombres, edades, condiciones y necesidades a quienes viven hoy fuera del sistema. Porque incluso la política social más sofisticada falla cuando no sabe cuántos ni quiénes son sus destinatarios. Aquí hay un vacío que debe ser corregido por las municipalidades y las delegaciones presidenciales. La calle no es oficina de estadísticas, pero sin datos no hay diseño posible. Y sin diseño, no hay política pública que resuelva.

Resulta paradójico que, en tiempos donde se discute sobre seguridad, violencia, crimen organizado y narcotráfico, se olvide que la base más elemental de la seguridad comienza en el espacio público. Un paradero con buena luz y visibilidad, una plaza sin rucos ni microbasurales, un paseo peatonal con presencia constante de vigilancia y personas circulando, ya reduce significativamente la posibilidad de delitos. Así lo establece la teoría de las “ventanas rotas” —aunque hoy debatida, sigue siendo una referencia útil—: los entornos descuidados favorecen una percepción de impunidad y abandono que luego se traduce en conductas desviadas o

directamente delictuales.

Pero este enfoque de seguridad no puede ni debe entrar en contradicción con el enfoque de derechos. Porque el desamparo que hoy se percibe en las calles también habla de una institucionalidad débil, incapaz de abordar la complejidad de la exclusión social. No se trata de esconder el problema debajo de la alfombra. No es solo sacar los colchones y carpas con camiones municipales o desalojar por la fuerza. Se trata de diseñar rutas de atención integral: salud mental, rehabilitación, acceso a albergues dignos, contacto con redes familiares, reintegración laboral. No es un trabajo de una sola institución. Es, por definición, una responsabilidad intersectorial.

Y aquí surge la pregunta más incómoda: ¿quién es el responsable de actuar? ¿La municipalidad? ¿El Ministerio de Desarrollo Social? ¿Salud? ¿Interior? ¿Seguridad Pública? La respuesta corta es todos. Pero la falta de coordinación entre ellos provoca lo que vemos hoy: ninguna intervención clara, nadie que lidere de forma sostenida, y una comunidad que comienza a normalizar lo

inaceptable.

Porque lo más peligroso no es solo el deterioro físico del espacio, sino el deterioro moral que implica dejar de mirar, dejar de importarnos. La ciudad se vuelve ciega y sorda, y las personas que la habitan también.

Revertir esta normalización requiere más que recursos. Requiere voluntad política, sensibilidad social y trabajo permanente. No se puede vivir con dignidad en una ciudad que ha decidido ignorar a los que duermen en sus esquinas. Tampoco se puede aspirar a la seguridad cuando se permite que el espacio común se vuelva un campo minado de abandono y riesgo.

Volver a preocuparnos por los espacios públicos no es un lujo de ciudades desarrolladas. Es una urgencia en cualquier comunidad que se tome en serio el derecho a vivir con dignidad. Es hora de exigir menos discursos y más acción. Porque al final del día, todos compartimos el mismo espacio. Y lo que no se cuida, se pierde.

Y lo que se pierde en el espacio público, muchas veces, no se recupera jamás.

No es nuevo el problema, pero sí cada vez más urgente. En nuestras ciudades, especialmente en los sectores más transitados de Iquique, Antofagasta, Santiago o cualquier otro centro urbano del país, el deterioro de los espacios públicos parece haber entrado en una etapa de naturalización alarmante. Calles oscuras por luminarias en mal estado, plazas convertidas en dormitorios precarios, parques que han dejado de ser espacios de recreación y que hoy son territorios de abandono. La pregunta no es si lo vemos, sino por qué dejamos de actuar ante ello.

Lo cierto es que la preocupación por el espacio público no puede reducirse a un debate estético ni a un problema de “limpieza urbana”. Estamos hablando de un tema estructural, profundo y humano. Lo que se juega aquí es la calidad de vida, la cohesión social y la dignidad de las personas. Y también —con la misma seriedad— la